

Señor

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. (reparto)

E.S.D.

Ref: Ordinario Laboral de MARTHA LILIANA ALZATE GÓMEZ

.C.C 39.749.121 contra:

- **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**
- **Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones**

ANA MARIA CRISTANCHO BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.644.120 de Bogotá , con Tarjeta Profesional número 91.736 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del demandante **MARTHA LILIANA ALZATE GÓMEZ** igualmente domiciliado en ésta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía número 39.749.121, tal y como obra en poder adjunto, en término y en estricta aplicación de los artículos 4° a 10° del CPT, interpongo demanda ordinaria laboral, para que en sede de primera y segunda instancia se profieran las siguientes:

DECLARACIONES

- 1) Se declare la ineficacia del acto jurídico de traslado de mi mandante del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación definida ocurrido en Junio de 1999.
- 2) Se declare que mi mandante fue afiliado por **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS**. sin recibir información clara, cierta, compresible y oportuna.
- 3) Se declare que la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** omitió el deber de información e indujo en error a mi mandante en el acto jurídico de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad

- 4) Se declare que la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** no dio efectivo cumplimiento al deber de brindar información suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad.
- 5) Se declare que la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** no le permitió a mi mandante ejercer el derecho de retracto.
- 6) Se declare que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente ante la necesidad de suscripción de un consentimiento informado.
- 8) Se conmine a la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** a la realización de una proyección de mesada pensional indexada a la fecha de la sentencia de primera instancia.
- 10) Se conmine a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a la realización de una proyección de mesada pensional indexada a la fecha de la sentencia de primera instancia.

Probados los hechos que soportan las pretensiones declaratorias, solicito a su Despacho profiera las siguientes:

CONDENAS

1°: Se condene a la demandada COLFONDOS S.A. PENSIONE SY CESANTÍAS a trasladar los aportes cotizados durante las **1344,71** semanas de cotización a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones con todos los intereses, rendimientos, saldos de cuenta individual y sumas adicionales de aseguradoras sin posibilidad de efectuar descuento alguno ni por gastos de administración ni por comisiones obtenidos a la fecha efectiva de traslado

2°: Se condene a la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** a informar al Señor Juez , dentro de los siguientes 30 días a partir del auto de obediencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, todos y cada uno de los valores trasladados, debidamente discriminados, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, ingresos base de cotización, aportes, descuentos objeto de devolución, su indexación y demás información relevante que los justifiquen y que prevengan controversias posteriores a la ejecutoria del fallo de primera instancia.

3. Se condene al pago de costas y agencias en derecho a cargo de la demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS**

Fundamento la solicitud de pretensiones declaratorias y de condena en los siguientes:

HECHOS

- 1) El demandante nació el 15 DE JUNIO DE 1967**
- 2) A la fecha cuenta con 1216 semanas de cotización en régimen de ahorro individual con solidaridad.**
- 3) Mi mandante cotizó 114 semanas al régimen de prima media con prestación definida**
- 4) La demandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS** afilió a mi mandante al régimen de ahorro individual con el simple diligenciamiento de un formulario, y solo hizo la salvedad, que trataba de un acto meramente voluntario “ el acto de afiliación” y no recibió , la asesoría necesaria para conocer las implicaciones económicas de un futuro escenario pensional, aun cuando tuviera en su momento solo expectativas pensionales y estuviera muy lejos de cumplir requisitos para obtener una pensión de vejez.

5). La demandada **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** afilió a mi mandante al régimen de ahorro individual sin realizar al menos una proyección de un futuro pensional, ni un cálculo actuarial, mucho menos una advertencia, que sus aportes y rendimientos quedaban al “vaiven” y suerte del encaje bancario.

6). Siendo 15 de junio de 2017, la fecha límite para que mi mandante trasladara sus aportes a Colpensiones en estricta aplicación del art. 2 de la ley 797 de 2003, la demandada PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS, no cumplió con su deber de informar, alertar, prevenir y avisar a mi mandante que se acercaba el plazo para hacerlo; solo guardó silencio y se limitó a enviarle los extractos semestrales de rendimientos de aportes durante los siguientes doce años.

7). Sin realizar un escenario pensional, ni un cálculo actuarial, sin indicarle siquiera, cuáles eran sus expectativas pensionales en ese momento, sin informarle cuál sería su mesada pensional de continuar afiliada a ese régimen, sin informarle cuál era el capital mínimo que debería alcanzar para tener una pensión vitalicia, sin hacer siquiera una proyección de una mesada pensional al cumplir 52; la demandada COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS afilió a mi mandante, acto que quedó en firme, con la suscripción del formulario de afiliación por parte del señor Moya y sin suscripción del acta de “consentimiento informado”

8). La omisión del deber de información por parte de la demandada en el acto de afiliación de mi mandante fue evidente. No suministró información, **clara**, cierta y comprensible.

9). La falta de suscripción del “consentimiento informado” en el acto jurídico de afiliación, fue el hecho que caracterizó la afiliación y traslado al RAIS. Este hecho conllevó a viciar el consentimiento del afiliado, al inducirlo en error, toda

vez que como se mencionó anteriormente, mi mandante, fue engañado por Colfondos, al suministrar información insuficiente e incompleta para conocer las reales implicaciones de su futuro pensional.

10).Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías nunca suministró información idónea respecto a las consecuencias de la afiliación al régimen de ahorro individual, especificando capital y demás factores que contribuirían a cumplir las expectativas pensionales.

11). La demandada Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías no ofreció una pensión más favorable, de tal manera que le indicara a mi mandante que frente a sus expectativas pensionales, el régimen de ahorro individual con solidaridad sería su mejor escenario.

12). Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías tiene la carga probatoria en demostrar que cumplió con su deber de ofrecer a mi mandante la información pertinente, veraz, oportuna y suficiente respecto del cambio de régimen pensional, los beneficios y consecuencias del mismo, tal como se exige desde la expedición artículo 97 del Decreto 663 de 1993. Información que no se encuentra acreditada ni aun deviene del formulario de afiliación

13). La conducta omisiva por parte de Colfondos., demuestra una inducción al error respecto a mi mandante, aspecto éste, el cual conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de antaño, se asimila al vicio del consentimiento por dolo, error en el objeto y de hecho (Art. 1508 y s.s del C.C.).

14). Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías incurrió en una falta al deber de información, el cual perjudica las condiciones pensionales de la demandante, obligación que era de imperioso cumplimiento al momento de la afiliación, sin omitir ningún tipo de dato (carga dinámica de la prueba), tales como las formas de liquidación y los varios sistemas para acceder a la

mesada, las implicaciones que comportan sobre las sumas que integran la cuenta individual, la posible reliquidación anual y la firma de contrato con una aseguradora.

15). La omisión en la información veraz, oportuna y suficiente sobre las consecuencias del traslado, implícitamente engendran un vicio de consentimiento denominado dolo, como ya se advirtió, pues se indujo a mi mandante en error en el traslado, indistintamente del tiempo que haya transcurrido luego de la movilidad de régimen o que se haya trasladado de AFP, pues las personas se pueden mantener por largo tiempo engañadas, mientras no se les ponga en conocimiento el daño realmente sufrido, de ahí, que se deba declarar la nulidad, la cual apareja indiscutiblemente la ineficacia del traslado como consecuencia lógica.

16). El 26 de Abril de 2023 mi mandante solicitó el traslado de sus aportes a Colpensiones y le fue negado por no reunir el requisito del art. 2 de la ley 797 de 2003, esto es, encontrarse a menos de 10 años de cumplir la edad requerida.

17). Mi mandante en la actualidad no cuenta con reconocimiento pensional de ningún tipo ni por ninguna de las contingencias derivadas de los riesgos de invalidez, vejez o muerte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

De conformidad con lo consagrado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el problema jurídico, trata en éste asunto, en verificar la procedencia de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional del

demandante, por falta de información suficiente por parte de las administradoras demandadas. Así como también, si hay lugar o no, a la devolución de los rendimientos y gastos de administración a Colpensiones.

El traslado de régimen por vinculación a una A.F.P., es un acto jurídico que requiere para su eficacia y validez, del consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícita, así como el cabal cumplimiento de la forma solemne en los actos o contratos que así lo exijan. El artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en su literal b) estableció que la selección de uno cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones, será libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. Dispuso el artículo 271 de la Ley 100 ibídem, que si cualquier persona natural o jurídica impide o atenta en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El inciso 1.º del artículo 114 de la Ley 100 de 1993, impuso como exigencia a los trabajadores y servidores públicos, que por primera vez se trasladaran del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad, que deberían entregar una comunicación escrita, donde constara que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones, y el inciso 7.º del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, permitió que la citada manifestación estuviera 'preimpresa' en el formulario de vinculación, de que la decisión que está tomando el afiliado es libre, espontánea y sin presiones, norma esta, que se

encuentra en plena vigencia y no ha sido materia de derogatoria alguna. Así las cosas, es menester precisar que, de antaño, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que las Administradoras de fondos de pensiones ostentan una responsabilidad de carácter profesional. Al respecto, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008 rad. 31989 reiterada en la CSJ SL, 6 dic. 2011 rad. 31314, dijo:

“Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información.

La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una

información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional rasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; en asunto neurálgico, como era el cambio de régimen de pensiones, de quien ya había alcanzado el derecho a una pensión en el sistema de prima media, su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado, la clara inconveniencia de postergar el derecho por más de cinco años, bajo la advertencia de que el provecho de la pensión a los sesenta años, era solo a costa de disminuir el valor del bono pensional, castigado por su venta anticipada a la fecha de redención.

En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que “se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones”, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña.”

Ahora bien, frente a la obligación de brindar información, en sentencia CSJ SL1688-2019, la mentada Corporación expuso:

“Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”.

Y en lo que respecta a la carga de la prueba, adujo:

“(…) es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez.

Bajo tal premisa, frente al tema puntual de a quién le corresponde demostrarla, debe precisarse que si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió,

ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca.

En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

(...) no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada – cuando no imposible – o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento.”

En esta providencia, también se dijo:

“(...) ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información.

De hecho, la regla jurisprudencial (...) es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba a favor del afiliado.

Lo anterior se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.”

Estos criterios, fueron expuestos en la mentada sentencia de tutela CSJ STL8125-2020, M.P. Doctor Omar Ángel Mejía Amador, la cual, como en precedencia se dijo, llevó a cambiar el criterio que venía sosteniendo el suscrito frente al tema de las nulidades e ineficacias de traslado de régimen pensional.

En dicha acción constitucional, se adujo:

“En este fallo (CSJ SL4426-2019), la Sala precisó que, tratándose de procesos de ineficacia de traslado de régimen pensional, es a la administradora de fondos a la que incumbe demostrar que ha cumplido con sus afiliados el deber de información antes aludido, el cual comprende una descripción de las características de cada uno de los regímenes pensionales en un lenguaje comprensible y de fácil acceso para el afiliado.”

Así las cosas, conforme la jurisprudencia en cita, al alegarse la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen pensional, la carga de la prueba de acreditar el cumplimiento del deber de información corresponde al fondo de pensiones, sin que haga alguna diferencia si la afiliada era o no beneficiaria del régimen de transición, o tenía

una expectativa pensional, ya que esto resulta inane para la aplicación del precedente precitado.

Frente al particular, la pluricitada CSJ SL1688-2019, expuso:

“(...) la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignada en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo acreditan un consentimiento, pero no informado.”

Y en la acción de tutela, arriba citada, la cual llevó a cambiar el criterio de este Magistrado Sustanciador, se dijo:

“La Sala de Casación Laboral de esta Corte ha establecido que de la simple suscripción del formulario de afiliación no puede deducirse el cumplimiento del deber de información que tienen las administradoras de fondos de pensiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Decreto 633 de 1993, contentivo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Precisamente, en la sentencia CSJ SL4426-2019, expresó:

De otra, porque la simple firma del formulario al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado. (...)”¹

Ahora bien, en lo que respecta a la falta de vicios en el consentimiento en el negocio celebrado entre la actora y los fondos de pensiones, es menester precisar que:

“la reacción el ordenamiento jurídico (arts. 271 y 272 L. 100/1993) a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. Por este motivo, el examen del acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (vuelta al status quo ante, art. 1746 CC), dejando a salvo las sumas de dinero recibidas por el trabajador o afiliado de buena fe.

Por lo expuesto, resulta equivocado el análisis de estos asuntos bajo el prisma de las nulidades sustanciales, particularmente, el exigirle al afiliado demostrar la existencia de vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo), pues, el legislador expresamente, consagró de qué forma el acto de afiliación se ve afectado cuando no ha sido consentido de manera informada.

(...) Es claro entonces que la referencia de la AFP accionada a que el demandante no demostró vicios de error, fuerza o dolo es inaplicable, al igual que su alegación de saneamiento del acto, puesto que, a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos.”²

Posición esta, que fue replicada en la pluricitada sentencia de tutela CSJ STL8125-2020, con lo que no es posible aplicar dicho argumento, así como tampoco aquel referente a la ratificación del acto por traslado entre administradoras de fondos de pensiones.

Por lo antes expuesto, al no acreditarse por parte de las A.F.P. accionadas que hubiesen suministrado información completa y comprensible en el ofrecimiento de sus productos al momento de la celebración de su acto, la sanción jurídica a ese incumplimiento, es la ineficacia o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, debe anotarse, frente a la devolución de todos los saldos existentes en la cuenta individual del actor, entre ellos, bonos pensionales, sumas adicionales si las hubiere, frutos e intereses, y gastos de administración, debe anotarse, frente a la devolución de todos los saldos existentes en la cuenta individual del actor, entre ellos, cotizaciones, rendimientos financieros y gastos de administración, debe decirse, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL1421-2019, señaló:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora esta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.”

Así mismo, en sentencia CSJ SL638-2020, indicó:

“Respecto a los efectos que produce la ineficacia del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, encuentra la Sala que estos consisten en que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban con antelación, esto es, como si el traslado no hubiera ocurrido, lo que apareja que Colfondos S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”.

Por ello, al tenerse como nunca realizado el traslado, debe la demandada Protección, devolver todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, entre ellos, bonos pensionales, sumas adicionales si las hubiere, frutos e intereses, y gastos de administración y todas aquellas sumas depositados en la cuenta de ahorro individual de la demandante, pues dichos valores pertenecen al Sistema General de Seguridad Social.

Respecto de la excepción de prescripción la mentada Colegiatura ha dicho que la acción de ineficacia de traslado pensión es imprescriptible, “(...) *pues, recuérdese, «la exigibilidad judicial*

de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción”³,

NATURALEZA: *Se trata de proceso ordinario laboral de primera instancia y en estricta obediencia del art. 31 CPT*

CUANTIA:

Como se trata de una acción de ineficacia de un traslado la cual no tiene cuantía y siendo el lugar del domicilio del demandado en esta ciudad, Usted Señor Juez laboral del circuito de Bogotá, competente para conocer de la presente acción.

PRUEBAS:

Documentales: *Solicito a su Despacho tener por documentales:*

- 1. Copia de la cédula de ciudadanía de mi mandante*
- 2. Extracto de pensiones obligatorias*
- 3. Reclamación administrativa ante Colpensiones,*
- 4. Aviso ley 1322 de 2022*

A N E X O S:

- 1) Poder*
- 2) Extracto de pensiones obligatorias*
- 3) Certificados de existencia y representación legal de Colfondos S.A.*
- 4) Reclamación administrativa ante Colpensiones,*

5) Aviso ley 1322 de 2022

6) Cedula y tarjeta profesional de la suscrita

NOTIFICACIONES : Las mías en la calle 12 no. 7 – 32 ph en Btá.

Cel + 57 3187117112. Mail: pensionesylitigio@anamariacristancho.com.co o acristanchobecerra@gmail.com

- Mi mandante: marthaliliana77@hotmail.com
- Colpensiones: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y Protección AFP: accioneslegales@proteccion.com.co

Del Señor Juez,



ANA MARIA CRISTANCHO BECERRA C.C. 52.644. 120

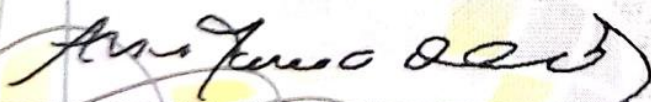
T.P. 91.736 C.S. de la J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.644.120**
CRISTANCHO BECERRA

APELLIDOS
ANA MARIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1973**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

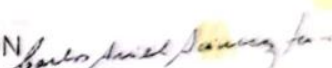
1.56
ESTATURA

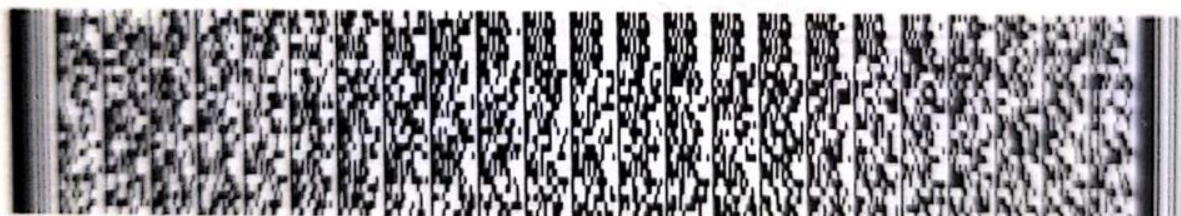
O+
G.S. RH

F
SEXO

25-SEP-1991 USAQUEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00229023-F-0052644120-20100326

0021796113A 1

1440636240

297662

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

91736-D1

Tarjeta No.

11/06/1998

Fecha de
Expedición

21/04/1998

Fecha de
Grado

ANA MARIA

CRISTIANCHO BECERRA

52644120

Cédula

CUNDINAMARCA
Consejo SeccionalEXTERMINADO
Universidad


María Mercedes López Mora
Presidenta Consejo Superior de la Judicatura